



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETO No. 28.-

EL CONSEJO DE MINISTROS,

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con la Constitución de la República, la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común; en consecuencia, es obligación de este asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social;
- II. Que el artículo 32 de la Constitución de la República establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico;
- III. Que la Ley de Desarrollo y Protección Social dispone que el Estado es el garante de aplicar dicho cuerpo normativo con un enfoque de derechos humanos y tiene entre sus objetivos, contribuir a que toda persona humana goce del derecho a una mejora continua de su nivel de vida y a una mejor distribución del ingreso nacional, a una disminución de la desigualdad y a la reducción sostenida de la pobreza;
- IV. Que entre los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo, el Gobierno de la República se ha propuesto acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente, mediante el fortalecimiento del pilar contributivo y no contributivo de la protección social, el fortalecimiento de los programas de erradicación integral de la exclusión y la pobreza y el avance en la garantía de los derechos de los grupos poblacionales prioritarios;
- V. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 58, de fecha 19 de octubre de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 195, Tomo No. 413, del 20 del mismo mes y año, se designó a la Presidencia de la República, a través de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, como la institución pública coordinadora del Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social y del Subsistema de Protección Social Universal y le otorga la facultad de proponer al Presidente de la República, nuevos programas de protección social o modificaciones a los existentes;
- VI. Que la política social es un factor coadyuvante del desarrollo, constituyendo una mirada ética, de justicia social, solidaridad y equidad en el reparto de los beneficios del desarrollo nacional, más que un simple factor de contención y mitigación de las

desigualdades, de tal forma, que coloca en primer plano a la persona, su grupo familiar y sus necesidades, frente a un cúmulo de situaciones adversas y de exclusión;

- VII. Que la protección social es uno de los principales mecanismos para la redistribución de ingresos, ya que promueve la sensación de pertenencia de las poblaciones excluidas, fomenta la ciudadanía y contribuye a la cohesión social;
- VIII. Que en razón de tales fines, se ha diseñado la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador, que expresa en sus componentes y acciones, el compromiso del Gobierno de la República de avanzar progresivamente en el cumplimiento de los derechos de los grupos poblacionales prioritarios.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA la creación de la:

“ESTRATEGIA DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA”

Art. 1.- Créase la “Estrategia de Erradicación de la Pobreza”, en adelante “la Estrategia”, la cual tendrá por objeto contribuir a la erradicación de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, de manera progresiva mediante la promoción del ejercicio pleno de derechos, la protección social, el fortalecimiento de las capacidades, la creación de oportunidades y la participación ciudadana.

La Estrategia es un conjunto de acciones interinstitucionales e intersectoriales de política pública, dirigidas a la atención prioritaria de las familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

Las acciones interinstitucionales e intersectoriales, combinarán de manera secuencial, intervenciones estratégicas que buscarán:

- a) Garantizar condiciones para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales;
- b) La creación de medios de vida sostenibles y el fortalecimiento de los activos productivos y humanos; y,
- c) El aumento de capacidades para disminuir la vulnerabilidad.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La Estrategia estará conformada por 4 componentes, articulados entre sí, a fin de asegurar la atención integral a las familias, de acuerdo a su situación.

Los componentes serán los siguientes:

1. Acompañamiento socio-familiar.
2. Inclusión financiera y productiva.
3. Apoyo al ingreso para la reducción de brechas de desigualdad.
4. Infraestructura social.

La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, será la instancia responsable de la coordinación y dirección de la Estrategia; por lo que formulará y modificará el marco conceptual con participación de las instituciones pertinentes; así como el manual operativo de la misma, que desarrollará los componentes arriba enunciados.

Las instancias de decisión estratégica y articulación interinstitucional para la implementación de la Estrategia, serán las establecidas por la Ley de Desarrollo y Protección Social.

Art. 2.- La Estrategia sustituirá gradualmente al Programa Comunidades Solidarias, de acuerdo a la priorización de municipios definida por el Registro Único de Beneficiarios o participantes de los programas sociales. Los municipios de Comunidades Solidarias, donde no se esté implementando la Estrategia, continuarán con la entrega de transferencias monetarias y el seguimiento de corresponsabilidades a los beneficiarios que ya están participando. No se realizarán nuevas incorporaciones de beneficiarios, con excepción de las personas adultas mayores, que cumplan con los criterios establecidos, hasta que la Estrategia se implemente en dichos municipios.

Art. 3.- La Estrategia contará con la cooperación de diferentes instancias nacionales e internacionales, que coadyuvarán con ella en el cumplimiento de su objetivo. Al respecto, cualquier mención que en convenios internacionales y demás instrumentos, se haga del programa Comunidades Solidarias, deberá entenderse, en lo sucesivo, que se hace referencia a la Estrategia de Erradicación de la Pobreza. Lo que también aplica a todo lo que pueda referirse al tema de cuentas o activos.

Art. 4.- En cuanto al componente de infraestructura social, la priorización de acciones será determinada por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, tanto en los municipios que se incorporan a la Estrategia, como en los municipios donde continua implementándose el Programa Comunidades Solidarias, las cuales contemplarán mejoras al sistema de agua potable,

protección de fuentes de agua, saneamiento, acceso a energía, mejoramiento de infraestructura educativa y de salud y mejoramiento de vivienda y hábitat.

Podrán incluirse inversiones extraordinarias, previa opinión favorable del Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia.

Art. 5.- La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia evaluará, conjuntamente con las instituciones ejecutoras, las prioridades de inversión de la Estrategia y formulará, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, las propuestas de programación anual de inversión pública, sometiénola a las instancias correspondientes. En los mismos términos, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia será la responsable de aprobar propuestas de cambios en la programación presupuestaria anual, relacionados con cualquiera de los componentes de la Estrategia, a fin de garantizar la consecución de sus objetivos y metas.

Art. 6.- Para la priorización de los municipios y de los hogares, se utilizará el Registro Único de Beneficiarios o participantes de los programas sociales, en adelante "RUP", el cual es administrado por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, para identificar a los hogares participantes.

El RUP es la herramienta que identifica, prioriza y caracteriza las condiciones de vida y carencias de los hogares, así como las personas potenciales destinatarias de los programas sociales del Gobierno. Contiene información estructurada, sistematizada y normalizada, que segmenta a los hogares, según sus características socio-económicas.

El RUP calificará a los hogares, a través de un índice generado a partir de variables incluidas en las dimensiones de riqueza familiar, activos materiales del hogar, educación y capital social, entre otras que se determinen en los instrumentos respectivos. Por medio del índice, se ordenan los hogares de menor a mayor condición de vida, conformando 20 agrupaciones denominadas estratos, siendo el estrato 1 el de menor calidad de vida y el estrato 20 el de mayor calidad de vida.

Art. 7.- La priorización de municipios se realizará, a partir del porcentaje de hogares con menor calidad de vida (estratos 1 al 7), calculado con base a resultados del RUP y del Censo Nacional de Población y Vivienda vigente, el cual clasifica a los 262 municipios del país.

Podrán incluirse otros municipios, previo dictamen favorable del Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, de acuerdo a prioridades establecidas en el Plan El Salvador Seguro o prioridades nacionales decretadas por la Presidencia, a raíz de emergencias, casos fortuitos o de fuerza mayor.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Art. 8.- La incorporación de nuevos municipios a la Estrategia se realizará, de acuerdo a la asignación presupuestaria que se disponga para las acciones de esta y al orden establecido en el artículo anterior.

Art. 9.- Dentro de cada municipio participante en la Estrategia, se incorporarán los hogares ubicados en los estratos 1 al 7 priorizados por el RUP y que cumplan con los criterios de elegibilidad de cada componente, pudiendo elevar el estrato superior de esta condición, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Art. 10.- La operativización de la Estrategia será realizada en conjunto con diversas instituciones, siendo el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, FISDL, una de las principales implementadoras.

Otras instituciones que participarán en la implementación de la Estrategia, de acuerdo a lo requerido por cada componente o programa vinculado y según determinación de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, serán:

1. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT)
2. Ministerio de Educación (MINED)
3. Ministerio de Salud (MINSAL)
4. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
5. Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
6. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)
7. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU)
8. Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)
9. Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)
10. Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
11. Otras instituciones, según sea requerido por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, para la ejecución de la Estrategia.

Las atribuciones y competencias de las instituciones ejecutoras, serán descritas en el Manual Operativo.

Art. 11.- La implementación de la Estrategia en el ámbito territorial, se articulará en los siguientes niveles:

- a) Nacional: El Gabinete de Gestión Social e Inclusión, tendrá la responsabilidad de orientar las decisiones de nivel político de la Estrategia.

El apoyo técnico al Gabinete se realizará por medio del Comité Intersectorial del Subsistema de Protección Social y de considerarlo necesario, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia podrá crear instancias de coordinación para la articulación de todas las instituciones vinculadas a la ejecución de la Estrategia y será el responsable de dar seguimiento operativo a la ejecución de la misma.

- b) Departamental: El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial será responsable de facilitar la articulación territorial interinstitucional entre el Órgano Ejecutivo y los Gobiernos Municipales, por medio de las Gobernaciones Departamentales y sus correspondientes Gabinetes de Gestión Departamental y facilitar el seguimiento al cumplimiento de metas y lineamientos de la Estrategia.
- c) Municipal: El Gobierno Municipal será el encargado de facilitar la coordinación y articulación intersectorial de la Estrategia en el municipio.

Las funciones específicas de los diferentes niveles, serán descritas en el Manual Operativo.

Art. 12.- Establécese un período transitorio de 6 meses, para que las instituciones ejecutoras realicen los ajustes presupuestarios e institucionales, para asegurar la ejecución de la Estrategia.

Art. 13.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 56, de fecha 28 de septiembre de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 188, Tomo No. 385, del 9 de octubre del mismo año, por medio del cual se creó el Programa Comunidades Solidarias, así como sus reformas posteriores, emitidas mediante los Decretos Ejecutivos siguientes:

- 1) Decreto Ejecutivo No. 72, de fecha 31 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 101, Tomo No. 387, del 1 de junio del mismo año;
- 2) Decreto Ejecutivo No. 175, de fecha 20 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial No. 175, Tomo No. 400, del 23 de ese mismo mes y año; y,
- 3) Decreto Ejecutivo No. 85, de fecha 28 de septiembre de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 176, Tomo No. 408, del 28 de ese mismo mes y año.

No obstante la anterior derogatoria, las familias beneficiarias del Programa Comunidades Solidarias, tanto para el área urbana como rural, que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto se encuentren recibiendo bonos de salud, educación y pensión básica universal, continuarán recibiendo las transferencias monetarias y el apoyo y seguimiento respectivo, hasta la incorporación del municipio correspondiente en la Estrategia, de conformidad al Art. 2 del presente Decreto. Para tales



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

efectos, se continuará aplicando la normativa técnica correspondiente, hasta que el último municipio donde actualmente se ejecuta dicho Programa, se haya incorporado a la Estrategia.

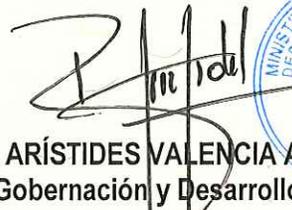
Art. 14.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los ocho días del mes de junio de dos mil diecisiete.




SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
Presidente de la República.




RAMON ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

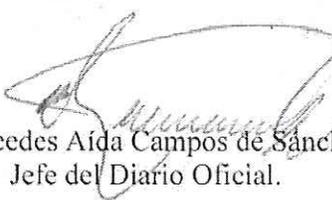


Constancia No 2224

La Infrascrita Jefe del Diario Oficial:

Hace constar: que el Decreto Ejecutivo No. 28, el cual contiene la creación de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza, aparecerá publicado en el Diario Oficial No. 106, Tomo No. 415, correspondiente al nueve de junio del corriente año, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Y a solicitud de la **Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República**, se extiende la presente Constancia en la DIRECCION DEL DIARIO OFICIAL; San Salvador nueve de junio de dos mil diecisiete.


Mercedes Aida Campos de Sánchez,
Jefe del Diario Oficial.



Adem